

MEMORIA JUSTIFICATIVA

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 2.2.8.4.1.22, 2.2.8.6.4.2 DEL DECRETO 1076 DE 2015 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.6.2.1 del Decreto 1076 de 2015, para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales, deben contar con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal – PAC y el Presupuesto anual de rentas y gastos.

El Plan de Gestión Ambiental Regional, conforme lo indica la citada norma en su artículo 2.2.8.6.3.1, *“es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones”*, instrumento que tiene una vigencia mínima de 10 años y su formulación se hace de manera coordinada con los representantes de los diferentes sectores sociales y económicos de la región.

Por su parte, el Plan de Acción Cuatrienal, concreta el compromiso institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional, para el periodo institucional.

Este instrumento tiene dentro de sus componentes el Plan financiero, que contiene las fuentes, los mecanismos de articulación de recursos, el mejoramiento en la eficiencia de los recaudos especificando con base en ello la proyección de los ingresos para el cuatrienio a partir del cual se hace la asignación de recursos por programas y proyectos para cada año.

Con el fin de asegurar la articulación entre estos instrumentos de planificación, el artículo 2.2.8.6.4.13 del citado Decreto 1076 de 2015, establece que: *“El presupuesto Anual de la Corporación Autónoma Regional, deberá guardar concordancia con el Plan de Acción Cuatrienal”*.

Por su parte el artículo 2.2.8.4.1.22, reza que: *“El director general tiene calidad de empleado público, sujeto al régimen previsto en la Ley 99 de 1993, el presente decreto y en lo que sea compatible con las disposiciones aplicables del orden nacional.”*



La elección y nombramiento del director general de las Corporaciones por el consejo directivo se efectuará para un periodo de cuatro años. La elección se efectuará conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, modificada por la Ley 1263 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya. El director General de las Corporaciones Tomará Posesión de su cargo ante el presidente del consejo directivo de la corporación previo el lleno de los requisitos legales exigidos.

Dentro de los cuatro meses siguientes a su posesión, el director general presentará para aprobación del consejo directivo un plan de acción que va a adelantar en su periodo de elección...(...)" (subrayado fuera de texto)

Dado lo dispuesto en el artículo citado, en los casos en que por razones muy excepcionales no se cuenta con director electo o que habiendo sido elegido no se ha podido posesionar o ha sido separado del cargo por orden judicial antes de la formulación y aprobación del Plan de Acción Cuatrienal, las corporaciones no pueden proceder a la formulación y aprobación de dicho instrumento de planificación, lo cual implica que su funcionamiento, el cumplimiento de sus funciones misionales y la ejecución presupuestal, así como las modificaciones presupuestales como adiciones, disminuciones, o traslados, no se pueden realizar al no contar con dicho documento, el cual es requisito para la contratación y para la ejecución presupuestal conforme con las disposiciones 2.2.8.6.4.13 del citado decreto 1076 de 2015.

Esto es mucho más grave y puede generarse por un tiempo inclusive superior a una vigencia, en el caso de la falta del director por suspensión del acto administrativo de elección, pues no se puede tener certeza de la duración de esta situación que perfectamente puede llegar a ser superior a una vigencia.

Igualmente, la rama judicial ha venido imponiendo a las Autoridades Ambientales por vía de orden judicial obligaciones y acciones ambientales que para su cumplimiento requieren generar las modificaciones del caso en los planes de acción y con amparo en ello financiar su cumplimiento, pero no existe marco que les ampare en el caso que no cuenten con el PAC, se genera incertidumbre sobre la legalidad o posibilidad de ejecución del gasto que obligatoriamente deben hacer para el cumplimiento de las sentencias.

En este mismo sentido, las corporaciones se ven afectadas, pues si no cuentan con un PAC, no pueden presentar proyectos para aprobación y cofinanciación ante los fondos o el presupuesto del orden nacional.

Por otra parte, la imposibilidad de formular y aprobar los Planes de Acción Cuatrienal ante la ausencia del director electo, implica serias dificultades en la generación de acciones para el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las prioridades o metas del Plan Nacional de Desarrollo, así como en el seguimiento a la gestión de las corporaciones por parte del Ministerio, los entes de control o el mismo consejo directivo al no contar con el instrumento de referencia que es el PAC.



Por lo anterior, se requiere generar un marco normativo que permita a las Corporaciones contar un instrumento de Planificación de la entidad y no del Director electo, esto es, que el instrumento tenga un horizonte de vigencia acorde con el periodo institucional, que permita a la corporación funcionar y cumplir su misión independientemente de si su director es encargado o electo o cualquiera sea su condición.

En concordancia con lo anterior, el término para la realización de la audiencia pública en el proceso de formulación del Plan de Acción Cuatrienal, deberá también ajustarse en el sentido que se debe realizar dentro de los cuatro primeros meses del periodo institucional y no los siguientes a la elección y posesión del director.

Finalmente, se requiere generar un régimen transitorio para aquellas corporaciones que a la fecha no han podido formular y aprobar sus respectivos planes de acción por haberse realizado la elección con posterioridad a los cuatro meses iniciales del actual periodo institucional o no contar con director electo o este encontrarse suspendido por orden judicial como es el caso de CARDER y CORPORINOQUIA.

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el fallo del Consejo de Estado de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019), con ponencia del Magistrado OSWALDO GIRALDO LOPEZ, con el cual se declara la nulidad del numeral 10 del artículo 2.2.8.4.1.22, se modifica dicho numeral con el fin de sujetar esta causal de destitución del director general a los estatutos corporativos y así ajustarlo a las prescripciones de la Ley 99 de 1993 artículo 27.

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el fallo del Consejo de Estado de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019), con ponencia del Magistrado OSWALDO GIRALDO LOPEZ, mediante el cual se declara la nulidad del numeral 10 del artículo 2.2.8.4.1.22 ibidem, se modifica dicho numeral con el fin de sujetar esta causal de destitución del director general a los estatutos corporativos y así ajustarlo a las prescripciones de la Ley 99 de 1993, artículo 27.

Es importante en términos de oportunidad, contar con esta modificación a la mayor brevedad posible para de esta forma poder garantizar la debida planeación y seguimiento de la gestión de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, en este momento en que apenas inician su periodo institucional, a fin de evitar situaciones que pudieren afectar la función y misión de estas entidades.

2. AMBITO DE APLICACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO Y LOS SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO.

El decreto por el cual se modifican los artículos 2.2.8.4.1.22, 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones, se aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.



3. VIABILIDAD JURÍDICA, QUE DEBE CONTAR CON EL VISTO BUENO DE OFICINA JURÍDICA LA ENTIDAD O LA DEPENDENCIA HAGA SUS VECES.

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución

Los numerales 12 y 14 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establecen como principios generales ambientales que el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Política, será descentralizado, democrático y participativo y que las Instituciones Ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física;

El Sistema Nacional Ambiental (SINA), estructurado en el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, está conformado en orden descendente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos, Distritos y Municipios; en consideración a lo anterior, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Departamentos, Distritos y Municipios deben obedecer a una misma Política Ambiental y observar en materia de planificación ambiental las regulaciones y orientaciones establecidas para tales efectos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, por lo tanto, sus instrumentos y mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y homogéneos entre sí, de tal forma que se permita hacer el seguimiento y evaluación integral de la Política Ambiental Nacional;

De acuerdo el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible están encargadas de ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los del orden regional que les hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; y de ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Igualmente, conforme con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 31 de ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, “Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción...”;

El Decreto 1076 de 2015 en su Libro 1, Parte 2 Sector Descentralizado, Título 8 Gestión Institucional, Capítulo 6, en sus artículos 2.2.8.6.1.1.1. al 2.2.8.6.4.1., y 2.2.8.6.4.12. al



2.2.8.6.5.5., regula los Instrumentos de Planificación Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

En virtud a lo anterior y dado que las disposiciones que pretenden, son los artículos 2.2.8.4.1.22, 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, norma actualmente vigente, que se refiere a temas relacionados con la planificación ambiental de las corporaciones autónomas regionales, tema que conforme a las previsiones ya mencionadas son objeto de orientación por parte de la política ambiental desde el orden Nacional, corresponde al gobierno nacional de acuerdo con la competencia otorgada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, expedir el presente proyecto de decreto.

4. EL IMPACTO ECONÓMICO, SI ES EL CASO, EL CUAL DEBERÁ COSTO O AHORRO DE IMPLEMENTACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO.

La presente norma no genera impacto económico alguno ni a las Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo Sostenible ni al Gobierno Nacional.

5. LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SI FUERE EL CASO.

No aplica.

6. DE SER NECESARIO, EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE PATRIMONIO CULTURAL LA NACIÓN.

La presente norma no genera un impacto directo sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente, pero al permitir que se eliminen obstáculos para la debida planificación ambiental si tiene un efecto positivo sobre la gestión ambiental que se orienta a la protección de los recursos naturales y del ambiente.

7. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONSULTA Y PUBLICIDAD PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1 1.1 Y 1 1.1 DEL PRESENTE DECRETO, CUANDO HAYA LUGAR A ELLO.

La presente norma no requiere consulta previa de conformidad

8. CUALQUIER OTRO ASPECTO LA ENTIDAD REMITENTE CONSIDERE RELEVANTE O IMPORTANCIA PARA LA ADOPCIÓN LA DECISIÓN.

No aplica.

Este proyecto de acuerdo no se refiere a asuntos de competencia de otros ministerios o departamentos administrativos del orden nacional.